



Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto **914/2022 y su acumulado 915/2022**, promovidos por *****
***** ** ***** y *****
***** ***** ** ***** , por
conducto de su apoderado legal, contra actos del **Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía y otra autoridad**; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS.
Por escritos recibidos el **ocho de septiembre de dos mil veintidós** en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, turnados al día siguiente a este órgano jurisdiccional, *****
***** y *****
***** ** ***** , por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Autoridades Responsables

- 1. Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- 2. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

LETICIA DURAN GONGORA
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.e
20/07/24 14:16:28



Actos Reclamados

a) El ***“Acuerdo Núm. A/023/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final”***, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veintidós, específicamente los considerandos Séptimo, Octavo, Undécimo, Duodécimo, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Quinto y Trigésimo Octavo, al igual que los acuerdos Primero, Segundo, Cuarto y Quinto.

b) El **Anexo Único** del referido Acuerdo A/023/2022; en particular, sus numerales 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 4.2.

c) La **lista de precios máximos aplicables de Gas LP** a consumidores finales por región y medio de venta, cuya publicación se lleva a cabo de manera semanal, de conformidad con el numeral 4.2 del indicado Anexo Único; así como, sus actualizaciones semanales publicadas en la página electrónica oficial de la Comisión Reguladora de Energía a partir del treinta de junio de dos mil veintidós.



Sin que pase inadvertido que las quejasas también hayan señalado como acto reclamado la omisión de sustanciar de forma idónea el procedimiento administrativo contenido en el oficio **CONAMER/22/3389** de veintidós de julio de dos mil veintidós; sin embargo, es innecesario precisarlo como acto reclamado de forma destacada.

Lo anterior es así, ya que el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que cuando se reclame en el juicio de amparo una resolución emitida por alguno de aquéllos, tal como la CRE, sólo podrá impugnarse la definitiva, ya sea por i) violaciones cometidas en la resolución o ii) durante el procedimiento.

En el caso, es evidente que dicho acto pretende impugnarse como una violación derivada de un acto intraprocesal propio del Procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio a que se sometió el Acuerdo **A/023/2022** de la CRE, lo cual actualiza la hipótesis normativa mencionada en el párrafo anterior.

No obstante, ello no implica dejar en estado de indefensión a la quejosa respecto de dicho acto, sino que su análisis se llevará a cabo en la medida en que su aplicación, de haberse verificado, haya trascendido al Acuerdo **A/023/2022**, en virtud de haberse originado durante el procedimiento administrativo de este.



SEGUNDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. Las quejas narraron, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados; señalaron como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 14, 16, 25, 28, 87, 90, 92, 124, 128 y 133 constitucionales; y, expusieron los conceptos de violación que estimaron pertinentes.

TERCERO. ACUMULACIÓN Y ADMISIÓN. Mediante proveído de **doce de septiembre de dos mil veintidós** se decretó de plano la **acumulación** de las demandas de amparo registradas con los números de expediente **914/2022** y **915/2022**, **admitiéndose** a trámite; por lo que, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, fijándose hora y fecha para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VII, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, y 35 de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 22/2013 del Pleno



del Consejo de la Judicatura Federal¹, toda vez que la materia del juicio involucra un acuerdo emitido por la CRE, cuyo contenido se vincula con la subespecialización de este órgano jurisdiccional (competencia económica), en particular, con el establecimiento de la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo.

SEGUNDO. CERTEZA DE ACTOS. Son ciertos los actos que se atribuyen al **Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)** y a la **Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)**; puesto que, así lo reconocieron dichas autoridades en su informe justificado.

Sin que pase inadvertido que la representación jurídica de la **CONAMER** haya aceptado únicamente la emisión del Dictamen Final de Análisis de Impacto Regulatorio dentro de un procedimiento de mejora regulatoria sustanciado conforme al marco normativo aplicable, negando en consecuencia el señalamiento de la parte quejosa en cuanto a *la omisión de sustanciar de forma*

¹ "Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su Transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción Territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece.



idónea el procedimiento administrativo establecido para su emisión.

Sin embargo, conforme lo asentado en el resultando primero y atendiendo al hecho de que las quejas pretenden evidenciar que el dictado del Acuerdo **A/023/2022** derivó de un procedimiento que no fue sustanciado de manera idónea, lo procedente es tener como **ciertos** los actos reclamados, constituyendo una cuestión atinente al fondo del asunto, determinar lo fundado o infundado de ese señalamiento.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305 visible en la página doscientos seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."

Además, la existencia del Acuerdo y su anexo está acreditada, ya que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio su publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veintidós²; así como, la publicación de los listados de precios máximos que refieren las

² [DOF - Diario Oficial de la Federación](#)



quejas, al ser posible su consulta vía internet en la página oficial de la comisión³.

Cobrando aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, identificada con el rubro ***"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN"***⁴.

TERCERO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe abordarse el estudio de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de ese mismo ordenamiento y en la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

³ [Precios máximos aplicables de Gas LP | Comisión Reguladora de Energía | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](https://www.gob.mx/energia/precios-maximos-aplicables-de-gas-lp)

⁴ Jurisprudencia visible en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación con el Registro 191452.



En la especie, esta Juzgadora considera actualizada la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, puesto que las quejas no formularon conceptos de violación contra los listados de Precios Máximos aplicables a las ventas al público en general de gas licuado de petróleo que se han emitido y que se lleguen a emitir con fundamento en los ordenamientos reclamados y su inminente ejecución.

El contenido de los artículos y fracciones señalados es el siguiente.

“Artículo 61. *El juicio de amparo es improcedente:*

(...)

XXIII. *En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.”*

“108. *La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:*

(...)

VIII. *Los conceptos de violación.*

(...)”.

De la interpretación sistemática de dichos preceptos se puede desprender que en el caso de que se omita formular conceptos de violación en contra de los actos reclamados, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio, puesto que la



consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO”⁵**.

Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/2000⁶, ha establecido que no es un requisito esencial e imprescindible que los conceptos de violación se presenten como un verdadero silogismo, sí es necesario que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, de la cual se advierta cuál es la lesión que el acto, resolución o ley impugnada causa y **los motivos que generan el agravio, para que el juez de amparo deba estudiarlo.**

En el caso concreto, las quejas señalan en su escrito de demanda los listados referidos como actos reclamados; sin embargo, no se observa que formulen conceptos de violación dirigidos a controvertir su contenido específico y, mucho

⁵ Visible en la página web del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 206656.

⁶ **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.”** Visible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191384>.



menos, a demostrar la afectación que les ocasiona su contenido. Esto último, con independencia de que los incluya como parte de los argumentos que formula respecto del Acuerdo y anexo que también reclama.

De manera que a partir de ello no es posible sostener que formulen conceptos de violación contra los listados mencionados.

Aunado a ello, los conceptos de violación que plantean son insuficientes para ser considerados, incluso, causa de pedir respecto de tales listados.

Sobre lo que debe entenderse por *causa de pedir*, debe considerarse que corresponde a la mínima necesidad de explicar el *por qué* o *cómo* el acto o resolución que se reclame resulta inconstitucional o ilegal.⁷

En el caso, aun cuando las quejas señalan los preceptos que impugnan, los artículos constitucionales y derechos fundamentales que consideran fueron violados, no precisan las razones por las cuales consideran que los listados reclamados vulneran el contenido de esos preceptos constitucionales mediante argumentos específicos.

En ese sentido, al no haber expuesto algún razonamiento con el que demostraran que los

⁷ Cfr., tesis (V Región)2o. J/1 (10a.), de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘RAZONAMIENTO’ COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.”**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, página 1683.



listados bajo análisis son inconstitucionales, es claro que la causa de pedir requerida para estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad no quedó satisfecha. Máxime que por la materia de este juicio, no existe obligación de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Por tanto, ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos fundamentales que ocasionan actos en comento, lo procedente es **sobreseer** en el juicio de amparo respecto de tales actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en términos de lo que dispone el diverso artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal.

CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA INOPERANTE. En relación con los diversos actos reclamados, el **Órgano Interno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)** hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumentando que el Acuerdo reclamado no le depara un perjuicio real y actual a la parte quejosa en su esfera de derechos.

Sostiene, que el Acuerdo A/023/2022 se emitió en beneficio de los usuarios finales, conlleva un interés social y generalizado, permite la viabilidad financiera de los proyectos de distribución de gas licuado de petróleo y, por lo mismo, no restringe el desenvolvimiento de las actividades



permissionadas ni limita o restringe los beneficios que reciben las quejas con motivo de los permisos expedidos a su favor.

Asimismo, agrega que la metodología contenida en el acuerdo contempla un margen de utilidad asociada a la actividad que realiza la parte quejosa, por lo que no le impide percibir un beneficio económico.

En relación con ello, la **CRE** también manifiesta que el perjuicio planteado en todo caso es de tipo económico, no jurídico y, por ello, no es suficiente para justificar la procedencia del juicio de amparo.

Tal causa de improcedencia es **inoperante**.

El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que invoca la autoridad responsable, prevé lo siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)”

El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del



gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y, así el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, visible en las páginas quinientos ochenta y dos y quinientos ochenta y tres, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice:

“INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.

El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos



afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.”

Esto es, tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse en base a presunciones, según lo establece la jurisprudencia número 321, que puede localizarse en la página doscientos dieciséis, de la compilación invocada, que dispone:

“INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.”

Cabe agregar que, el interés jurídico a que se alude tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

Resulta atendible, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, que dice:



“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.”

En ese orden, cabe destacar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, empleándose la frase “especial situación frente al orden jurídico” con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que



pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, circunstancia que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente.

De esta manera, conviene reiterar que en la especie se reclama el “**Acuerdo Núm. A/023/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final**”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio de dos mil veintidós, su **Anexo Único** del referido Acuerdo A/023/2022 y la consecuente lista de precios máximos aplicables de Gas LP a consumidores finales y medio de venta que se publican semanalmente.

El Acuerdo en cuestión establece una metodología que cambia el paradigma del mercado, en cuatro apartados:

1. Explica cuál será el alcance y objetivos de la regulación;
2. Desarrolla el concepto de planta tipo;



3. Establece el mecanismo para calcular los precios máximos de gas licuado de petróleo por región; y

4. Precisa las disposiciones relativas a los ajustes a que puede ser susceptible la metodología propuesta.

En relación con el tercer apartado, la **CRE** dispuso expresamente que los precios máximos de gas licuado de petróleo -por región- serán calculados mediante un modelo de costos que considera los siguientes criterios:

- i. La determinación de la planta tipo;
- ii. La inversión inicial, los costos de operación y de mantenimiento de la planta tipo;
- iii. Los costos y parámetros de eficiencia estimados, y los volúmenes de venta asociados a cada región;
- iv. El costo de flete estimado para cada una de las regiones, con base en el análisis realizado por la Comisión a partir de la información reportada por los permisionarios; y

v. El margen de comercialización, el cual considera una TIR (tasa interna de retorno) que permita a los permisionarios la recuperación de los costos totales por la inversión y operación del permiso de distribución de gas LP mediante planta, en un plazo máximo de veinte años y un margen de utilidad por la realización de la actividad.



De lo anterior, se llega a la convicción de que el ente regulador estableció una fórmula general para calcular el precio máximo de gas natural para cada región, integrada por una serie de variables. En ese contexto, queda demostrado que con el acuerdo reclamado se modificó el mercado de gas licuado de petróleo, dado que se transitó de un esquema libre de mercado a un sector regulado, en el que se imponen precios máximos para la comercialización del hidrocarburo.

De ahí que, a criterio de quien resuelve, los actos reclamados sí tienen consecuencias y efectos susceptibles de afectar o trascender en la esfera jurídica de las inconformes, puesto que como destinatarias de la norma (permisionarias), les son impuestas obligaciones y cargas regulatorias que, a su parecer, inciden directamente en el derecho fundamental de competencia y libre concurrencia en el mercado de distribución y expendio al público de Gas Licuado de Petróleo.

Situación jurídica ante los actos reclamados que se corrobora con los siguientes medios de prueba:

1. ***** ** *****
*****: Título de permiso de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin específico número *****.



2. ***** **

*****: Título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución número *****.

No pasa inadvertido que la documental que exhibió esta última quejosa y conforme a la cual, pretende acreditar el otorgamiento del citado permiso, corresponde al otorgado a diversa empresa –ajena a este sumario–; sin embargo, de la consulta realizada en la página oficial de la responsable se obtiene que el referido permiso

***** se encuentra en operación de la marca comercial *****

*****8,

como se constata con las siguientes imágenes:


LP/13809/DIST/PLA/2016 Operación

PETROQUIMICA BAJIO, S.A. DE C.V.

PETROQUIMICA BAJIO, S.A. DE C.V.

KM. 6+500 CARR. PANAMERICANA
AGUASCALIENTES-ZACATECAS
CAMINO ASFALTADO DE SALICILLO A N...

S/C



COMISIÓN
REGULADORA
DE ENERGÍA

Distribución de Gas Licuado de Petróleo
mediante Planta de Distribución

Permiso SENER	Nombre, razón social o denominación del solicitante	Nuevo número de Permiso CRE
AD-AGS-001-C/99	PETROQUIMICA BAJIO, S.A. DE C.V.	LP/13809/DIST/PLA/2016

Además, de las actas constitutivas que las sociedades exhibieron, se desprende como objeto social en común, la compra venta, transporte, suministro, distribución, importación y comercio en general de gas y cualquier otro tipo de gas que se derive del petróleo; por lo que, es preciso insistir, si

8
[https://www.cre.gob.mx/glp/documentos/Acuerdos/Anexo_Unico_A_012_2016.p
df](https://www.cre.gob.mx/glp/documentos/Acuerdos/Anexo_Unico_A_012_2016.pdf)



corporaciones
misionarias
a y los
frecuencia,
acreditado
juicio.

prueba n
dad con
Código
o que fue
estando
, que su
s original

al caso
K (10a.)
ra de
eración
013, ton
Gaceta de
ro 7, ju

**ELECTRO
HECHO
VALORA**
s datos p
situado
un hech
iento pú
ento en
e confor
ódigo
El acces



existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.”

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: **“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL**



JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por consiguiente, contrario a lo que arguye la **CRE**, no es factible considerar que su reclamo únicamente se relaciona con una afectación de tipo económico, menos aun cuando las inconformes acreditan que son titulares de un permiso vigente de distribución y expendio de gas LP a través de planta de distribución; por lo que, se ubican dentro de los sujetos obligados a dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo reclamado.

Por ello, es posible reiterar, los señalamientos de las partes, en cualquier caso, involucran cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, específicamente con el contenido, objeto y finalidad del Acuerdo en cuestión, así como del procedimiento administrativo que precedió a su dictado.

Por su parte, la **Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)** invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracciones I y II, 1, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, argumentando que no tiene el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo.

Lo anterior, según refiere, porque dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, en términos del artículo 23 de la Ley General de Mejora Regulatoria, tiene el mandato de promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como

la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, atendiendo a los artículos 1, 2, 7 y 8 de ese mismo ordenamiento y 25 constitucional, contando entre otras atribuciones, con la relativa a dictaminar las *Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes*.

Agrega, que en ejercicio de esa atribución, lleva a cabo el llamado procedimiento de mejora regulatoria, de conformidad con los artículos 71 a 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, el cual se aplica a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal, con determinadas salvedades. Que bajo esos supuestos normativos, previo a la emisión de una regulación, dichos sujetos obligados deben enviar a la CONAMER su propuesta regulatoria, acompañada de su correspondiente AIR (Análisis de Impacto Regulatorio), a efecto de sujetarlos al procedimiento, salvo las excepciones que en el artículo 71 dispone.

Por lo que, a su parecer, la CONAMER no participa en la elaboración de las propuestas regulatorias que se someten a su consideración ni en los AIR que los acompañan; sino que, únicamente recibe esas propuestas regulatorias, las cuales, no tienen efecto hasta en tanto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que su intervención en el procedimiento no reúne los



elementos necesarios para ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

En relación con lo anterior, la **CONAMER** invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalando que la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar los actos dentro del procedimiento de mejora regulatoria; puesto que, por su naturaleza, que conlleva el análisis y opiniones técnicas que emiten los sectores interesados, no causa algún daño a las inconformes, dado que el pronunciamiento o determinación final se desahoga exclusivamente con el órgano regulador, esto es, entre la **CONAMER** y la **CRE**.

Tales causas de improcedencia son **inoperantes**.

Pues, conforme se ha mencionado en este fallo, el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que cuando se reclame en el juicio de amparo una resolución emitida por alguno de aquéllos, tal como la CRE, sólo podrá impugnarse la definitiva, ya sea por i) violaciones cometidas en la resolución o ii) durante el procedimiento.

Y, en el caso, es evidente que la violación intraprocesal que se reprocha a la **CONAMER**, como autoridad que tiene legal intervención en el Procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio a



que se sometió el Acuerdo **A/023/2022** de la CRE, sostiene el dictado de este último; por lo que, corresponde al estudio de fondo el determinar si dicho Acuerdo, por sí o derivado de una violación en el procedimiento, afecta o no la esfera de derechos de las quejas (permisionarias).

Siendo que, contrario a lo argüido por la responsable, en la especie no se controvierten las propuestas presentadas por los sujetos obligados, sino el resultado del procedimiento, reflejado precisamente en el Acuerdo **A/023/2022** de la CRE.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. *Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.*”

Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta de oficio, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación



que expone la parte quejosa, al imperar en la especie el principio de estricto derecho.

QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a efectuar el estudio de fondo del asunto, se considera pertinente relacionar los antecedentes inmediatos del **Acuerdo A/023/2022** y la consecuente lista de precios máximos aplicables de Gas LP a consumidores finales, a saber:

1. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la **CRE** presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica (**COFECE**), una denuncia por posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica con motivo de diversas prácticas en la distribución de gas licuado de petróleo (Gas LP); denuncia identificada con el número de expediente *****.

2. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la COFECE publicó en el Diario Oficial de la Federación el *AVISO por el que se inicia la investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente ******, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP en el territorio nacional.

3. Con motivo de una segunda denuncia, la COFECE publicó el cinco de marzo de dos mil dieciocho, el *AVISO mediante el cual se informa el inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de expediente ** ******, por la



posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP en territorio nacional, bienes y servicios relacionados con los mismos.

4. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la *Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo*, en la que determinó que tendría una vigencia de seis meses y entraría en vigor al momento de su publicación. En específico, se exhortó a la CRE a establecer una metodología para fijar precios máximos al consumidor final de gas LP, considerando el establecimiento de condiciones para el acceso asequible al combustible, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.

5. En cumplimiento a esa directriz, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la CRE emitió el acuerdo *A/024/2021 que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales.*



6. Tanto la directriz⁹ como el acuerdo¹⁰ mencionados fueron prorrogados por seis meses más.

7. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la COFECE publicó en el Diario Oficial de la Federación el *EXTRACTO del Acuerdo por el que se la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio a fin de determinar si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional, identificada bajo el número de expediente ******.

8. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, la COFECE publicó el dictamen preliminar del expediente ***** , en el que concluyó de manera preliminar que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) de 220 (doscientos veinte) mercados relevantes en la distribución de gas LP, no vinculada a ductos, es decir, mediante plantas de distribución y autotanke.

En dicho dictamen, la comisión determinó que el gas LP en principio no es sustituible por otros productos como leña, carbón, coque, combustóleo,

⁹ A través del Aviso por el que se prorroga la vigencia de la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo.

¹⁰ A través del acuerdo A/001/2022, por el que se amplía la vigencia del Acuerdo A/024/2021, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al Usuario Final, en cumplimiento al Aviso por el que se prorroga la vigencia de la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo



electricidad, energía solar o gas natural, debido a diversas restricciones, limitaciones y costos de infraestructura.

Asimismo, indicó que ni el expendio al público ni la comercialización de gas LP son alternativas viables a la distribución mediante plantas de distribución o autotanque, por los siguientes motivos:

Actividad	Motivo
Expendio al público de gas LP	<p>Se realiza en las modalidades de BODEGA DE EXPENDIO, ESTACIÓN DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO y Estación de Servicio para Autoconsumo.</p> <p>La modalidad de BODEGA DE EXPENDIO es una actividad que se realiza in situ, por lo que los USUARIOS FINALES tendrían que desplazarse hasta los puntos de venta para adquirir el GLP. En el caso de las ESTACIONES CON FIN ESPECÍFICO, la regulación permite el llenado parcial de los RECIPIENTES PORTÁTILES. Sin embargo, el llenado se limita a un peso bruto de 25 (veinticinco) kilogramos y, además, se requiere que el USUARIO FINAL sea quien se traslade. Finalmente, la modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo únicamente permite que el GLP sea consumido por el propio permisionario, es decir, no permite la venta de GLP a USUARIOS FINALES.</p> <p>Desde el lado de la demanda, estos elementos impiden que el EXPENDIO AL PÚBLICO constituya una alternativa de sustitución a la DISTRIBUCIÓN de GLP mediante PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUES para los USUARIOS FINALES.</p> <p>Desde el lado de la oferta, las actividades de un permisionario de EXPENDIO AL PÚBLICO se encuentran limitadas por su</p>



	<p>permiso. Así, para estar en posibilidad de distribuir GLP a los USUARIOS FINALES, los permisionarios de EXPENDIO AL PÚBLICO tendrían que adquirir el permiso correspondiente (24) cumplir con la normatividad y regulación asociadas e invertir en la adquisición de los equipos necesarios para llevar a cabo la DISTRIBUCIÓN.</p>
Comercialización de gas LP	<p>No constituye una alternativa viable a la DISTRIBUCIÓN de GLP mediante PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUES.</p> <p>Un COMERCIALIZADOR no suele contar con infraestructura propia, por lo que se encuentra restringido a la existencia o disponibilidad de otros permisionarios para poder entregar el GLP en los domicilios de los USUARIOS FINALES o, por sí mismo, solicitar los permisos correspondientes. Sin embargo, la obtención de estos permisos, además del cumplimiento de la normatividad y regulación asociada, conlleva tiempo y costos monetarios que resultan en una opción poco viable para el COMERCIALIZADOR.</p> <p>El bajo consumo de GLP mediante esta modalidad refleja la poca presión competitiva que ejerce sobre la DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUE. Aun cuando la COMERCIALIZACIÓN ha atendido principalmente a USUARIOS FINALES del sector industrial, su participación en dicho sector con respecto a las PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN y AUTOTANQUES es considerablemente baja. Así, la proporción de las ventas a USUARIOS FINALES realizada por medio de la COMERCIALIZACIÓN entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, pasó de 0.33% (cero punto treinta y tres por ciento) a 0.52% (cero punto cincuenta y dos por ciento).</p>

LETICIA DURAN GONGORA
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.1e
20/07/24 14:16:28



9. El veintiocho de julio de dos mil veintidós, la CRE emitió el acuerdo reclamado A/023/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final.

En el **anexo único** de dicho acuerdo se contienen las disposiciones mencionadas, incluyendo la conformación y metodología del cálculo de precios.

En específico, se indica que dicha metodología se basa en una estructura de costos de las actividades propias del suministro de Gas LP a partir del cálculo de precios, planta tipo y cálculo de precios máximos conforme a la fórmula que ahí se contiene:

3.5.2 La fórmula a partir de la cual se determinarán los precios máximos de Gas LP al Usuario Final, para cada una de las regiones, será la siguiente:

$$P_{t,i,mv}^{Max} = (P_{t-1,i,mv}^{cpv} + Fl_{Q-1,i,mv} + MC_{t-1,i,mv}) K_{t,i} + IVA_i$$

Donde:

- $P_{t,i,mv}^{Max}$ = Precio máximo aplicable a la región i , en la semana t , que se refiere a la semana de su aplicación y la modalidad de venta mv , en pesos por kilogramo, o pesos por litro, según corresponda.
- $P_{t-1,i,mv}^{cpv}$ = Precio promedio de comercialización por punto de venta aplicable a la región i , en la semana $t-1$, y la modalidad de venta mv .
- $Fl_{Q-1,i,mv}$ = Costo unitario estimado del flete desde el centro embarcador punto de venta de la primera enajenación hasta la planta de distribución aplicable a la región i , en el trimestre inmediato anterior $Q-1$, y la modalidad de venta mv .
- $MC_{t-1,i,mv}$ = Margen de comercialización estimado para la semana $t-1$, para la región i y la modalidad de venta mv .
- $K_{t,i}$ = Factor de ajuste que se utilizará como método de control cuando la variación del precio máximo exceda la inflación anualizada. En caso de no existir variaciones del precio máximo que excedan la inflación el valor de k será 1.
- IVA_i = Impuesto al valor agregado aplicable a cada municipio de la región i .

10. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la COFECE emitió resolución en el



expediente ***** , en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Se determina la ausencia de condiciones de competencia efectiva en doscientos trece mercados relevantes, consistentes en la distribución de GLP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanque con una dimensión geográfica regional, identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.”

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En su sexto concepto de violación las quejas alegan que los actos reclamados son contrarios a los derechos de seguridad jurídica y buena administración, ya que derivan de un procedimiento de mejora regulatoria que se llevó a cabo de manera irregular, en virtud de que no se estudió ni analizó a fondo el verdadero impacto y sustento de la regulación propuesta; y que, en todo caso, la CONAMER tenía la obligación



de requerir a la CRE toda la información y documentación pertinente para sustentar la emisión del acuerdo y anexo reclamados.

Dicho planteamiento es **infundado**.

Para justificar lo anterior, es necesario exponer el marco normativo, en la parte que nos interesa, que regula el procedimiento al que hace alusión la parte quejosa.

La Ley General de Mejora Regulatoria en su artículo 71, párrafo primero, establece lo siguiente:

“Artículo 71. Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión o someterse a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, de la entidad federativa, municipal, alcaldía, según corresponda.”

Conforme al numeral transcrito, los Sujetos Obligados¹¹ que elaboren propuestas regulatorias, deberán presentarla ante la autoridad de mejora regulatoria correspondiente, en términos del artículo 69 de la misma ley, que a la letra dice:

¹¹ Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
(...)

XIX. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.

Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“Artículo 69. Los Análisis de Impacto Regulatorio establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos:

1. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue;

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación o Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las alternativas;

III. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado;

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;

V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Agenda Regulatoria a que se refiere el artículo 64 de esta Ley.

Para efectos de lo previsto en el presente artículo las Autoridades de Mejora Regulatoria podrán requerir información diferenciada de acuerdo a la naturaleza y el



impacto de las Regulaciones. Asimismo, las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán establecer criterios que los Sujetos Obligados deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatorias mitiguen el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.”

En el caso, de la página oficial de la **CONAMER**, cuyo contenido se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se desprende que la **CRE** remitió a dicha comisión los documentos siguientes: propuesta de acuerdo y su anexo, calculadora de impacto conforme a manifestación de impacto regulatorio ordinaria, análisis costo beneficio, y el formulario de manifestación de impacto regulatorio de alto impacto¹².

Derivado del análisis de esa documentación, el Comisionado Nacional de la **CONAMER** emitió el oficio **CONAMER/22/3389**¹³, en el que estableció consideraciones generales sobre la propuesta regulatoria, precisó sus objetivos y la problemática a la cual se dirige, analizó otras alternativas posibles, especificó el impacto de la regulación conforme a un análisis costo-beneficio, entre otras cuestiones. En la parte final del oficio señalado, dice lo siguiente:

“Con base en lo anterior, se emite el presente Dictamen Final, por lo que la CRE podrá continuar con las formalidades necesarias para la publicación de la Propuesta

¹² [CONAMER - Sistema de Mejora Regulatoria \(cofemersimir.gob.mx\)](https://cofemersimir.gob.mx/)

¹³

https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27291/emitido/61146/CONAMER_22_3389



Regulatoria en el DOF, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la LGMR.

Cabe señalar, que esta Comisión se pronuncia sobre el formulario del AIR y la Propuesta Regulatoria, en los términos en que fueron presentados, sin prejuzgar sobre cuestiones de legalidad, competencia y demás aspectos distintos a los referidos en el artículo 8 de la LGMR.”

Por ende, a consideración de quien resuelve, no asiste razón a las inconformes en el sentido de que previamente a la emisión del acuerdo reclamado y su anexo no se llevó a cabo un análisis de impacto regulatorio en términos de la legislación que regula dicho procedimiento.

De igual forma, del mismo oficio se advierte que desde el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la **CONAMER** recibió una versión previa de la propuesta regulatoria y la hizo pública. Incluso, en la misma página de dicha comisión se advierte que la fecha de apertura del expediente y de publicación en el portal es de esa misma data, lo que se corrobora porque desde el veinticuatro de junio siguiente se empezaron a registrar comentarios por parte de particulares a la medida reclamada¹⁴.

En ese sentido, incluso, se advierte que la propuesta de regulación junto con los documentos relativos al análisis de impacto regulatorio fueron presentados cuando menos treinta días antes de la

¹⁴ [Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final. \(cofemersimr.gob.mx\)](#)



fecha en que se publicaron el acuerdo y anexo reclamados, esto es, el veintiocho de julio de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación.

Luego, puede considerarse que con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Mejora Regulatoria, pues la propuesta se hizo pública a través del portal de la comisión desde la fecha de su recepción. Asimismo, estuvo a disposición para consulta por parte de particulares desde esa fecha, es decir, por lo menos veinte días previos a su publicación en el medio oficial mencionado, con lo cual se cumplió con el mínimo que requiere la ley citada¹⁵.

Por otra parte, si bien el artículo 69, último párrafo, de la Ley General de Mejora Regulatoria establece la facultad de requerir *información diferenciada de acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones*, lo cierto es que la interpretación literal de esa disposición permite advertir que se trata de una atribución potestativa y

¹⁵ **Artículo 73.** Las Autoridades de Mejora Regulatoria harán públicos, desde que las reciban, las Propuestas Regulatorias, el Análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo y todas las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben durante la consulta pública.

Para tal efecto, deberán establecerse **plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días**, de conformidad con los instrumentos jurídicos que las Autoridades de Mejora Regulatoria establezcan en el ámbito de su competencia. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan.



no como lo hace ver la parte quejosa, una obligación cuyo incumplimiento conlleve una irregularidad en el análisis de impacto regulatorio.

En esa medida, si bien las quejas también señalan que la CONAMER se alejó de los principios y objetivos de la política de mejora regulatoria, incumplió con su deber de responsabilidad y rendición de cuentas, así como que no estudió a fondo la regulación que fue sometida a su consideración, lo cierto es que se tratan de manifestaciones subjetivas que **no desvirtúan el cumplimiento de los requisitos legales conforme al análisis de impacto regulatorio y el procedimiento que se siguió ante esa comisión de manera previa a la emisión de los actos reclamados.**

Al no existir más violaciones procesales pendientes de estudio, se procede al análisis de los conceptos de violación de fondo. Para ello, es necesario precisar el marco normativo que sirve de base a los actos reclamados:

El artículo 28 constitucional establece que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario que tenga por objeto obtener el alza en los precios, así como en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con



perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Asimismo, señala que las leyes protegerán a los consumidores y fijarán las bases para que se establezcan precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de aquéllos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen la insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.

En relación con ello, el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica establece las bases para la imposición de precios máximos a bienes y servicios necesarios para la economía nacional. Para ello, señala, corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar qué bienes y servicios se deben sujetar a esa medida, pero sujeto a la condición de que no haya condiciones de competencia efectiva mediante declaratoria de la COFECE. En este supuesto, sería la Secretaría de Economía la que fijaría los precios correspondientes a fin de evitar la insuficiencia en el abasto¹⁶.

¹⁶ **Artículo 9.** Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por otra parte, el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos establece diversas facultades que corresponden a la CRE, una de ellas es la regulación y supervisión de la actividad de gas LP; aunado a ello, el artículo 82 del mismo ordenamiento dispone que la CRE expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere dicha ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los precios aplicables¹⁷.

Dicha regulación será aplicable salvo que a juicio de la COFECE existan condiciones de competencia efectiva, en cuyo caso los precios se determinarán conforme a las condiciones del mercado (artículo 81, fracción I).

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. (...)

Artículo 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:

l. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado;

II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que:

a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y

b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros.

La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente.

Además, la regulación que fije precios debe considerar: **a)** el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y **b)** en el caso de bienes que no sean comercializables en el mercado internacional, los precios deben considerar la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros. En la parte final del precepto citado, se señala que la Secretaría de Energía, la CRE o los propios permisionarios podrán solicitar a la COFECE la evaluación de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente¹⁸.

¹⁸ En relación con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 77 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de dicha ley establece:

Artículo 77. La Comisión expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permitidas conforme al presente Reglamento, con excepción de las actividades de comercialización y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

La Distribución no vinculada a Ductos de Gas Licuado de Petróleo y demás Petrolíferos no estará sujeta a la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas que emita la Comisión, por tratarse de una actividad que conlleva el Expendio al Público, en términos de los artículos 4, fracción XI, y 82, segundo párrafo, de la Ley, salvo determinación en contrario de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para cada actividad, la Comisión establecerá la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas, la cual además de prever las fracciones I y II del artículo 82 de la Ley, tomará en cuenta los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria objeto del presente Reglamento y de mercados competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y operación y que protejan los intereses de los usuarios.

La Comisión no reconocerá las contraprestaciones, precios o tarifas que se aparten de lo establecido en este párrafo. Adicionalmente, las contraprestaciones, precios o tarifas que autorice la Comisión deberán constituir mecanismos que promuevan una demanda y uso racional de los bienes y servicios. La Comisión podrá aplicar las medidas a que se refiere el artículo 83 de la Ley, a fin de que el grado de intervención corresponda con el poder monopólico en cada segmento de la industria permitida pudiendo, de ser el caso, aplicarse contraprestaciones, precios y tarifas basadas en condiciones de



Es importante señalar que si bien la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley facultan a la CRE para expedir disposiciones administrativas de carácter general para la regulación de precios, entre otros, también establece un conjunto de actividades que se encuentran excluidas de ello. En específico, se trata del expendio al público y la comercialización de gas LP. Al respecto, expresamente se indica que los precios correspondientes a estas actividades se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

Otra actividad que en principio se encuentra excluida de la regulación de precios consiste en la distribución no vinculada a ductos de gas LP, por involucrar el expendio al público; sin embargo, se establece como salvedad que exista determinación en contrario por parte de la COFECE en el sentido de que no existen condiciones de competencia efectiva en aquella.

mercado, de acuerdo con las mejores prácticas regulatorias si ello contribuye con el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el párrafo anterior.

En la determinación de contraprestaciones, precios o tarifas, la Comisión empleará las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, para lo cual podrá realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos, así como emplear indicadores de desempeño para fines de publicidad.

La determinación de contraprestaciones, precios o tarifas que apruebe la Comisión deberá permitir que los Usuarios y los Usuarios Finales tengan acceso a los bienes y servicios en condiciones de confiabilidad, seguridad y calidad, y no deberá ser resultado de prácticas monopólicas. Asimismo, la determinación de contraprestaciones deberá permitir a los Permisarios cubrir sus costos eficientes y una rentabilidad razonable en términos del inciso b) de la fracción II del segundo párrafo del artículo 82 de la Ley.

La Comisión podrá requerir, en los términos y formatos que al efecto determine, la información de costos, condiciones de operación y demás elementos estadísticos, técnicos y financieros que permitan valorar el riesgo de las actividades y el desempeño y la calidad de la prestación del servicio, para efectos de la estructura tarifaria y sus ajustes.



Al resolver el amparo en revisión ***** la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 28 constitucional para establecer que la Constitución Federal no dispone que la determinación de precios máximos para ciertos bienes o servicios sea una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, sino que delega el desarrollo normativo correspondiente a las leyes emitidas por el Congreso de la Unión para que, a través de ellas se establezcan los mecanismos, procedimientos, autoridades y supuestos en que se podrá ejercer aquélla. Por lo que, no existe prohibición constitucional para que sea la CRE el órgano que establezca esos precios en el ámbito de las actividades que están sujetas a su regulación.

Adicionalmente, también interpretó lo dispuesto en los artículos 9º de la Ley Federal de Competencia Económica y 82 de la Ley de Hidrocarburos en materia de fijación de precios máximos. Al respecto, determinó que el primer ordenamiento se refiere a una facultad excepcional en favor del Titular del Poder Ejecutivo Federal, la cual puede ejercer únicamente después de que la COFECE emitió resolución a través de la cual concluyó la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, caso en que el Presidente de la República podrá fijar los precios máximos de venta de los bienes y servicios necesarios para la economía nacional o el consumo popular.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En cambio, señaló, el segundo ordenamiento se refiere a un supuesto ordinario en el que será la CRE el órgano que determinará esos precios máximos.

Por último, concluyó que los preceptos de los ordenamientos citados son acordes entre sí:

(...) en cuanto a que la potestad prevista en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica corresponde a un caso excepcional; esto ya que el último párrafo del artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos establece que será la Comisión Federal de Competencia Económica quien determine si existen o no condiciones de competencia efectiva, lo cual es coincidente con lo previsto en la fracción I del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.”

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis 2a. LXXVI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1245, identificada con el rubro: **“HIDROCARBUROS. LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN VI, 82 Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, SE REFIEREN AL ESCENARIO ORDINARIO EN EL CUAL LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ES COMPETENTE PARA DETERMINAR LOS PRECIOS MÁXIMOS DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE LOS HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS O PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE GENERAN SEGURIDAD JURÍDICA”**.



Conforme a lo expuesto, se advierte que la Constitución Federal establece la posibilidad de fijar precios máximos en ciertos supuestos; sin embargo, delega el desarrollo de las bases para ello a la legislación ordinaria.

Al respecto, la Ley Federal de Competencia Económica establece **un supuesto excepcional**, conforme al cual previa resolución de la COFECE en el sentido de que no existen condiciones de competencia efectiva, exclusivamente el Titular del Poder Ejecutivo Federal determinará qué bienes y servicios quedarán sujetos a precios máximos y, a través de la Secretaría de Economía, qué precios les corresponderían.

Por último, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley establece **un supuesto ordinario** de fijación de precios que, salvo el caso de las actividades de comercialización y expendio al público de gas LP, debe sujetarse a las consideraciones que fueron indicadas. En el caso de distribución de gas LP no vinculada a ductos, tampoco está sujeta a la regulación de precios, salvo determinación en contrario de la COFECE de que no existen condiciones de mercado en términos del artículo 82, segundo párrafo, fracción I del primer ordenamiento citado.

Una vez expuestas estas consideraciones, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados en las demandas de amparo



acumuladas, aunque en un orden diverso al que se propone.

En su cuarto y quinto conceptos de violación, las quejas aducen que los actos reclamados resultan inconstitucionales porque se ejercen y materializan facultades reservadas al Titular del Ejecutivo Federal y la COFECE, que constituyen un requisito sine qua non para formalizar y concretar fácticamente los actos reclamados.

Mismos que, asumen, se emitieron aun cuando no existe un dictamen final de la COFECE respecto a la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de venta de Gas LP al usuario final, previa finalización del procedimiento de investigación y determinación relativo; por lo que, están sustentados en meras cuestiones de facto, como lo es el extracto preliminar del dictamen de la COFECE, como un mero proyecto sin ningún efecto jurídico ni de carácter vinculante.

Concluyen entonces, que la CRE debió esperar a que la COFECE resolviera lo conducente dentro del expediente de investigación *****

**** pues, de lo contrario, se genera la invalidez del Acuerdo reclamado y se actualiza una violación a los derechos fundamentales de debido proceso, buena administración pública y seguridad jurídica.

Tal concepto de violación es **infundado**.



En el artículo 16 constitucional se reconocen los principios de legalidad y seguridad jurídica. Conforme al primero, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados por ésta¹⁹.

En cuanto al principio y derecho de seguridad jurídica, tiene un aspecto positivo y uno negativo. El primero consiste en que los gobernados tengan plena certeza del contenido del ordenamiento jurídico existente, a grado tal que puedan conocer los alcances y consecuencias de las hipótesis normativas que el legislador ha contemplado, así como también el ámbito de competencia y de actuación de las instituciones y autoridades del poder público, las cuales sólo deben actuar de acuerdo con las atribuciones que expresamente tienen conferidas en ley.

Por su parte, el aspecto negativo permite a los gobernados evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades y, en caso de que ello suceda, poder acceder a los medios de defensa conducentes. Sin que ello se traduzca en que la ley tenga que señalar de manera especial un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De manera

¹⁹ Cfr. **P./J. 50/2007**, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 960.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que los gobernados sepan a qué atenerse y, por ende, no se encuentren en estado de indefensión ni de incertidumbre jurídica.

Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, de rubro: “**GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES**”²⁰.

Ahora, para dar contestación al planteamiento de las quejas, es importante señalar que no existen condiciones de competencia efectiva cuando en un mercado existen uno o varios agentes económicos cuya participación les da suficiente poder para fijar precios o restringir, sin que otros competidores puedan contrarrestar esa situación.

Al respecto, el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica establece un procedimiento declarativo, que puede iniciar de oficio o a petición de parte, para que la COFECE analice y determine si existen o no condiciones de competencia efectiva en un mercado, a fin de que la autoridad que corresponda implemente la regulación que resulte necesaria restaurar la operación eficiente en ese sector de la economía.

Dicho procedimiento tiene una etapa de inicio, lo que le permite a la autoridad realizar la investigación correspondiente y, una vez concluida ésta, debe emitir un dictamen preliminar en el que determine si existen o no condiciones de competencia efectiva. Después de una etapa de

²⁰ De la Segunda Sala del máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de 2006, página 351.

LETICIA DURAN GONGORA
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.6f
20/07/24 14:16:28

manifestaciones y desahogo de pruebas, la COFECE emitirá resolución u opinión en un plazo no mayor a treinta días, misma que se deberá notificar, en su caso, al Ejecutivo Federal y la autoridad coordinadora del sector correspondiente y publicar en la página de internet de la Comisión, así como publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, para efectos de que, en su caso, la autoridad coordinadora del sector, en este caso la CRE, pueda establecer la regulación y las medidas correspondientes, para lo cual podrá solicitar la opinión no vinculatoria de la Comisión.

En el caso en comento, la COFECE inició, de oficio, el procedimiento de investigación *****
**** y, una vez concluida la investigación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el dictamen preliminar en el que determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados relevantes de distribución de gas LP mediante plantas de distribución y autotanque.

En ese orden, es preciso reiterar que al analizar los artículos 82 de la Ley de Hidrocarburos y 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió a dos procedimientos para la determinación de precios máximos: uno **ordinario** y otro **extraordinario**, previstos en sendos ordenamientos. En el caso de este último procedimiento, indicó en el amparo en revisión

titia imper
 nitiera el
 el dictam
 diciembre
 epto que
 conclus
 artículo
 ómica.

o de v
Acuerdo
principio
anza legí
constituc
ón Ame
ción con
no Nover
onforme
Gas LP
usivame

precios
el Estad
tivo Fede
ria de l
de merc
ulación c
onfianza
cio del G
será de



que, el actuar de la responsable en diverso sentido, se traduce en una irregular continuación del instrumento de control de precios, pretendiendo darse continuidad a otros acuerdos que han quedado sin vigencia (A/024/2021, prorrogado con su similar A/001/2022) con un acto diferente pero que resulta una calca de los anteriores, que además carece de una fórmula matemática para obtener un correcto resultado sobre la fijación de precios máximos.

Tal concepto de violación es igualmente **infundado**.

Una de las manifestaciones del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta negativa, lo constituye el principio de confianza legítima. Derivado de éste, cuando las actividades de un poder público hayan creado en una persona interesada la confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que lo exija el interés público²¹.

Tal principio adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos. En el caso de los primeros, se entiende como la tutela de las expectativas razonablemente creadas en favor del gobernado, con base en la esperanza que la propia

²¹ 2a./J. 103/2018, de rubro: “**CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD**”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 847.



autoridad le indujo a partir de sus acciones u omisiones, las cuales se mantuvieron de manera persistente en el tiempo. De forma que generan en el particular la estabilidad de cierta decisión, con base en la cual haya ajustado su conducta, pero que con motivo de un cambio súbito e imprevisible, esa expectativa se vea quebrantada²².

No obstante, un elemento indispensable que debe tomarse en consideración al estudiarse si se ha transgredido o no esa figura, es la ponderación efectuada entre los intereses públicos o colectivos frente a los intereses particulares, pues el acto de autoridad podrá modificarse ante una imperante necesidad de interés público.

En este asunto, se considera que la emisión del acuerdo reclamado y su anexo obedece a una imperante necesidad de interés público que no permite reconocer una prerrogativa para que los permisionarios de distribución de gas LP continuaran desarrollando sus actividades en los términos y condiciones en los que las llevaban a cabo previamente a la emisión de dichos actos.

Como se expuso, se debe partir de la premisa de que constitucional y legalmente no existía impedimento jurídico para que la CRE decidiera establecer precios máximos de gas LP al usuario final en relación con la actividad de distribución no vinculada a ductos. No obstante, se debe valorar si

²² 2a. XXXVIII/2017, de rubro: “**CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, tomo II, página 1386.



dicha comisión se encontraba frente a una imperante necesidad de interés público.

En primer lugar, conviene hacer hincapié en que el artículo 28 constitucional es claro en señalar que una de las condiciones para el establecimiento de precios máximos consiste en que se trate de productos necesarios para el consumo popular. Asimismo, uno de los objetivos por los cuales se pueden fijar consiste en evitar el alza de precios, lo que puede interpretarse como un principio patente de protección a los consumidores finales de esos productos.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a), de rubro: **PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**²³.

Al respecto, conviene reiterar que desde el año de dos mil diecisiete, la CRE presentó ante la COFECE al menos dos denuncias por posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica en el mercado de distribución de gas LP.

Incluso, en el documento denominado “Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP”, citado en el acuerdo reclamado, se advierte que la propia COFECE ya había

²³ Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable a foja 398 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, tomo I.



advertido que los grados de concentración en el segmento de distribución de gas LP habían aumentado de 48% en dos mil quince y dos mil dieciséis a 53% en dos mil diecisiete. Asimismo, sostuvo que ello podía deberse a cinco características: i) uso estratégico de la infraestructura existente, ii) tamaño del mercado, iii) la figura de los comisionistas en la distribución, iv) regulaciones locales, y v) asociaciones de distribuidores.

En cuanto al consumo de gas LP, de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), se estima que el gas LP es el combustible que más se utiliza en las viviendas mexicanas con una proporción de 79%²⁴. Además, es un producto cuyo consumo es relevante en términos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH, 2020), también del INEGI²⁵, lo que repercute en las viviendas que registran menores ingresos, pues la proporción de gasto que tienen que destinar para el rubro electricidad y combustibles es mayor.

De igual forma, como se indica en el acuerdo en cuestión, desde la implementación de precios máximos de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo A/024/2021 y su prórroga se obtuvieron

²⁴ Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. ENCEVI. Presentación de resultados (inegi.org.mx)

²⁵ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 ENIGH (inegi.org.mx)



resultados que permitieron la contención del aumento de precios que significó un ahorro de \$897.00 (ochocientos noventa y siete, 00/100 moneda nacional) por vivienda al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Además de que ello significó una reducción de presiones inflacionarias que al final repercutió favorablemente en los consumidores finales de gas LP.

Por otro lado, a partir de la información reportada a través del Sistema de Registro de Transacciones Comerciales de Gas LP, la CRE obtuvo información relativa a que en los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, el 82.5% (ochenta y dos punto cinco) del volumen de ventas nacional a usuarios finales (esto es, las personas que adquieren Gas LP para su consumo) fue concentrada por la actividad de distribución, mientras que el 16.5% (dieciséis punto cinco por ciento) la actividad de expendio en estación de servicio y el 1% (uno por ciento) la comercialización.

En esa medida, resulta patente que existía una evidente necesidad de interés público que justificaba la regulación vía establecimiento de precios máximos de gas LP objeto de venta al usuario final, ya que estaba involucrado un producto de consumo popular cuyos precios han ido en aumento. Además, se trata de un interés que debe tener prevalencia frente al interés particular de los permisionarios que participan en esos mercados relevantes, por la incidencia que puede tener en los



consumidores finales y, sobre todo, en el nivel de gasto que destinan para la adquisición de ese combustible, el cual, como se indicó, es utilizado en una amplia proporción en las viviendas mexicanas.

Por ello, no puede considerarse que había expectativas razonablemente creadas en favor de los particulares de que continuarían determinando los precios del gas LP de acuerdo a las condiciones del mercado, ya que como se desprende del artículo 77, segundo párrafo, del Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, ello está sujeto a la salvedad de que la COFECE determine que no existen condiciones de competencia efectiva, como ocurrió en la especie.

Adicionalmente, no puede considerarse un cambio súbito e imprevisible pues al menos desde dos mil dieciocho la COFECE ya había identificado signos de falta de competencia en los eslabones de distribución y expendio de gas LP a los usuarios finales. De igual manera, esto estuvo precedido, primero, de una Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo, así como la implementación del *Acuerdo A/024/2021 que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses*



de los usuarios finales; de ahí que, no asiste razón a las quejas respecto al planteamiento que pretenden hacer valer.

En su segundo motivo de disenso, las quejas aducen que el capítulo 3 del Anexo Único del Acuerdo A/023/2022 vulnera el derecho fundamental de concurrencia y competencia económica, previsto en el artículo 28 constitucional, toda vez que contiene errores metodológicos en el procedimiento para la fijación de precios máximos; haciendo especial énfasis en lo siguiente:

- Que con la metodología y fórmula descritas en las disposiciones de carácter general, casi idénticas a las usadas en el Acuerdo A/024/2021, no se obtienen los precios máximos para el Gas Licuado de Petróleo; y que, en el numeral 3.3.9 de ese capítulo se describe conceptualmente un modelo matemático que consiste en el valor presente neto de los flujos de efectivo del proyecto de inversión de una planta tipo evaluado a veinte años, sin embargo, la responsable sólo establece que los flujos se descontarán a la tasa interna de retorno (TIR), sin que en alguno de sus numerales exista la fórmula para determinar la TIR, por lo que el modelo matemático no puede usarse para resolver o determinar el margen de comercialización (MC).

Según refieren, el error de razonamiento y metodología de la responsable, impide resolver el



precio máximo conforme a la fórmula del numeral 3.5.2.

- Que la responsable elabora una metodología que abarca dos consideraciones, como son *planta tipo* y *ajuste de tarifas máximas*, sin desarrollar un proceso de razonamiento lógico-económico.

Aducen, que conforme al numeral 3.4.4 del Capítulo 3 para determinar la *planta tipo* se tomará en cuenta tanto plantas de eficiencia mínima como máxima; sin embargo, la utilización de diversos índices de eficiencia es incongruente con el propio esquema de determinación propuesto por la CRE.

Pues, a su parecer, no tiene ningún sentido determinar una *planta tipo* usando en la muestra plantas con un alto grado de ineficiencia, cuando el objetivo debe consistir en determinar tarifas máximas en mercados hipotéticamente competitivos y, por consiguiente, en el largo plazo las plantas eficientes deben salir al mercado. Por lo que, las omisiones advertidas conducen a errores en la fórmula contenida en el numeral 3.5.2 para la determinación de precios máximos, dado que no se precisan los elementos que forman parte indispensable de los costos de operación total de ese tipo de instalaciones que deben cubrir para poder operar con el cumplimiento regulatorio y garantizar el abasto a la población, tales como los costos regulatorios que las empresas deben cubrir y los de operación interna de una planta de distribución.

precios basados en el costo incremental de largo plazo, es el indicador apropiado en industrias potencialmente competitivas; y que, la CRE no determina correctamente el nivel de los precios y su estructura, afectando la libre concurrencia y competencia de la industria de Gas LP, por lo que era necesario precisar la metodología que planteó en el Acuerdo reclamado y su Anexo Único, sin someter al sector a una metodología experimental que no ha sido probada ni utilizada en México ni en ninguna economía razonablemente desarrollada.

En general, advierten que el Acuerdo reclamado hace referencia a los elementos que se establecen para obtener el llamado costo de venta a partir del concepto planta tipo, así como el precio de venta, otorgando a la CRE un amplio margen de discrecionalidad para fijar los precios máximos de venta, a la vez que se inhibe la actividad de distribución de gas LP por medios no vinculados a ductos, en contravención a lo dispuesto en los artículos 25 y 28 constitucionales.

Tales argumentos son **infundados**.

Lo anterior, porque en el Anexo Único del Acuerdo reclamado se establece la conformación y la metodología del cálculo de precios máximos. Como se advierte de su contenido, se trata un modelo que incluye fórmulas, parámetros y variables que emulan el comportamiento financiero de la actividad de distribución.



La metodología se basa en una estructura y modelo de costos que incorpora diversas características, tal como parámetros de eficiencia y costos asociados a planta, rentabilidad asociada a la actividad de distribución de Gas LP, contribuciones fiscales, eficiencia operativa y características particulares de cada región. Sobre este último aspecto, se hace referencia a que los costos de venta asociados a la región son lo que distingue la variación de los precios máximos.

De igual modo, se establece que los precios máximos se determinarán para una planta tipo, definida como la planta de distribución de referencia que se utilizará en el modelo, con base en criterios de eficiencia de minimización de costos y características propias de la actividad de distribución de Gas LP, en cada mercado relevante, y que sirve para estimar el margen de esa actividad por medio de planta.

Por otra parte, del punto 3.5.2 de las disposiciones bajo análisis se desprende que los precios máximos de gas LP al usuario final se determinan con base en una fórmula, en la cual la variable a determinar la constituye el precio máximo aplicable a una determinada región.

Ello está dado por la suma de tres factores (precio promedio de comercialización por punto de venta aplicable, costo unitario estimado del flete y el margen de comercialización), multiplicados por un factor de ajuste (k) que constituye un método de



control cuando la variación del precio máximo excede la inflación anualizada. De no existir variación el valor será uno. Por último se suma el impuesto al valor agregado aplicable.

Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que las disposiciones reclamadas contienen los elementos necesarios para que los particulares puedan conocer el método o fórmula a partir del cual se determinarán los precios máximos, incluyendo cómo se conforma y cuál es el modelo para realizar el cálculo correspondiente. Además, el hecho de que haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación posibilita que sea de conocimiento de las promoventes y que éstos no se encuentren en estado de incertidumbre respecto a la forma en la que se determinarán dichas variables. Es decir, ello permite su conocimiento por los permisionarios y su consecuente aplicación.

Aunado a ello, la CRE publica regularmente y con la periodicidad indicada en el acuerdo los precios máximos de gas LP con un desglose por región, entidad federativa, municipio, así como precio obtenido por kilogramo y por litro (con IVA). Esto es visible en la página oficial de dicho órgano²⁶.

Incluso, el hecho de que en el Acuerdo reclamado y en la página de internet en mención no se detalle la forma (elementos fácticos, datos,

²⁶ Precios máximos aplicables de Gas LP | Comisión Reguladora de Energía | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)



cálculos y demás operaciones matemáticas) en la que todas las variables que conforman la fórmula de determinación de precios máximos deban ser sustituidas por valores reales, no vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que se trata de cuestiones propias del cálculo que deberán llevar a cabo las autoridades, en este caso la CRE, en uso de sus facultades como órgano con autonomía técnica, operativa y de gestión, que es precisamente lo que le permite llevar a cabo la regulación del sector energético nacional.

Además, si dicha comisión sustituyera erróneamente las incógnitas o variables en perjuicio de los particulares, esta actuación no podría acarrear la inconstitucionalidad del Acuerdo y su Anexo Único, ya que la contravención a la Constitución Federal no puede depender de circunstancias particulares, sino de la naturaleza intrínseca de las normas consideradas inconstitucionales y de aspectos generales.

Al respecto, resultan aplicables, por analogía, las siguientes jurisprudencias, referidas a la fórmula de Laspeyres:

“ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. AL PREVER EL ARTÍCULO 20 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DICHO INDICADOR SE CALCULARÁ TOMANDO EN CUENTA DETERMINADOS ELEMENTOS Y CONFORME A LA FÓRMULA DE LASPEYRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.”



“ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 20-BIS, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR NO INDICAR LAS OPERACIONES VARIABLES O INCÓGNITAS DE LA FÓRMULA LASPEYRES O POR NO PRECISAR CÓMO SE REALIZARÁN LAS SUSTITUCIONES DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS POR VALORES REALES.”

De igual modo, debe indicarse que la circunstancia de que las autoridades, como la CRE, cuenten con facultades discrecionales no necesariamente puede entenderse como un ejercicio arbitrario de sus atribuciones²⁷, pues en ese supuesto resulta necesario analizar los actos en los que éstas se concretan, a fin de determinar caso por caso si su ejercicio fue debido o indebido²⁸.

Además, en el caso la facultad de determinar precios máximos de gas LP está precedida de las disposiciones contenidas en el Acuerdo reclamado y su anexo, las cuales, conforme a lo expuesto, constituyen un marco de actuación que define con un suficiente grado de precisión cuál es el alcance y objeto de la metodología para la determinación de aquéllos, quiénes son los sujetos obligados, así

²⁷ 1a. CLXXXVII/2011, de rubro: “**FACULTADES DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES. LIMITACIÓN A SU EJERCICIO**”, correspondiente a la Décima Época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, tomo 2, página 1088.

²⁸ P. LXII/98, de rubro: “**FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, página 56.



como la conformación y fórmula de cálculo, entre otras cuestiones.

Todo lo anterior permite a los particulares saber a qué atenerse en cuanto a que deberán sujetarse a los precios máximos que establezca la CRE, la forma en que fueron obtenidos y las consecuencias de no dar debido cumplimiento a ello, lo que permite sostener que no se encuentran en estado de indefensión ni incertidumbre jurídica.

Por último, es importante señalar que si las quejas consideraban que los actos reclamados y, particularmente, los criterios que conforman la fórmula para la determinación de precios máximos de gas LP contienen alguna deficiencia técnica, que trasciende al análisis jurídico, estaba en aptitud de ofrecer el medio de prueba idóneo²⁹ para poder sustentar sus afirmaciones y aportar elementos que permitieran interpretar los alcances, efectos y consecuencias de esas disposiciones, así como aspectos técnicos, propios de un especialista, relacionados con su emisión y, por ende, con el acreditamiento de la afectación que aduce que le genera en su esfera jurídica.

Sobre todo en relación con los efectos que la fórmula en comento pudiera generar en contravención a los derechos y principios alegados, tal como libre competencia y concurrencia; sin

²⁹ Cfr. Tesis I.11o.C.16K de rubro: **"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. ES LA IDÓNEA PARA RESOLVER SOBRE HECHOS CONTROLVERTIDOS QUE REQUIEREN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS"**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, agosto de 2003, página 1806.



embargo, las quejas omitieron ofrecer dicho medio de prueba, siendo que ello resultaba necesario por el carácter técnico de la metodología que combate, advirtiéndose que las mismas se limitaron a anunciar la prueba pericial en materia de economía, sin haber ratificado su ofrecimiento, nombrado perito ni exhibido el cuestionario respectivo.

De ahí que, las cuestiones concernientes a la metodología, fórmula y demás aspectos relacionados con el procedimiento para la fijación de precios máximos, se torna **inoperante**.

En su primer concepto de violación, las quejas exponen que el Acuerdo A/023/2022 reclamado es inconstitucional, puesto que vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y libre concurrencia y competencia económica, e infringen el principio de división de funciones inmerso en la integración de los órganos constitucionales autónomos y los poderes de la Unión, así como el principio de supremacía constitucional.

Lo anterior, según refieren, porque se pretende fijar un precio máximo de venta al usuario final para las actividades de comercialización, distribución y expendio al público de Gas LP, no obstante que el artículo 28 constitucional confiere a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) la atribución directa de la regulación de los mercados económicos en el territorio nacional.



Y que, precisamente, la Ley Federal de Competencia Económica, en sus artículos 1 y 9, establece las bases para la procedencia y en su caso la conformación de precios máximos, indicando que será exclusivamente el Ejecutivo Federal quien determinará mediante Decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. Por su parte, la COFECE deberá determinar mediante declaratoria y previo procedimiento, la inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate, debiendo sujetarse esta última al procedimiento establecido en el artículo 96 de dicho ordenamiento.

Sostienen, que del Acuerdo A/023/2022 y su Anexo se advierte que la autoridad responsable no siguió los lineamientos constitucionales, dado que no es el Órgano de Gobierno de la CRE quien tiene la facultad, competencia o atribución para determinar qué mercados relevantes carecen de condiciones de competencia efectiva y consecuentemente emitir y materializar instrumentos para revertir esa situación; puesto que, la constitución dota al Ejecutivo Federal de esa facultad singular y exclusiva.

Por lo que, insisten en señalar, correspondía al Titular del Ejecutivo establecer que la venta y comercialización de Gas LP al usuario final quedaba



sujeta a precios máximos, posterior a que la COFECE así lo determinara mediante una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia efectiva en dicho mercado relevante. Solo así la CRE estaría facultada y en condiciones de emitir disposiciones generales que materializaran el decreto presidencial relativo, estableciendo una metodología clara y transparente para la fijación de precios máximos.

Que el actuar de la CRE es irregular y contrario al artículo 90 constitucional en relación con los artículos 19 a 21 la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, dado que en ningún momento intervino el Consejo de Coordinación del Sector Energético en el Acuerdo A/023/2022; y que, además, conforme al artículo 82, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, mientras existan condiciones de competencia efectiva, la regulación de contraprestaciones, precios y tarifas, se determinarán por las condiciones del mercado, como en este caso, en el que incluso en el numeral 77 del Reglamento de Actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, la distribución no vinculada a ductos de gas licuado del petróleo no estará sujeta a la regulación de precios, salvo determinación en contrario de la COFECE.

Es **infundado** el concepto de violación planteado por las quejas.

(...)

Transitorios

Vigésimo Noveno. *En relación con el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, se observará lo siguiente:*

(...)

Los precios al público de Gas Licuado de Petróleo se determinarán bajo condiciones de mercado a partir del 1o. de enero de 2017 o antes, en la fecha en que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los consumidores a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, y (...)"

Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley

"77. La Comisión expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permitidas conforme al presente Reglamento, con excepción de las actividades de comercialización y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

La Distribución no vinculada a Ductos de Gas Licuado de Petróleo y demás Petrolíferos no estará sujeta a la regulación de contraprestaciones, precios o tarifas que emita la Comisión, por tratarse de una actividad que conlleva el Expendio al Público, en términos de los artículos 4, fracción XI, y 82, segundo párrafo, de la Ley, salvo determinación en contrario de la Comisión Federal de Competencia Económica."

La interpretación de ambas disposiciones permite sostener que en principio son tres las actividades que quedan exceptuadas de la



regulación de contraprestaciones y precios por parte de la CRE: comercialización, expendio al público y distribución de vinculada a ductos, todas de gas LP. Sin embargo, en el caso de esta última actividad, se prevé una salvedad, consistente en que exista determinación en contrario de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sobre dicha salvedad, a consideración de quien resuelve, es claro que debe entenderse en el sentido de que, en principio, la actividad de distribución no vinculada a ductos de gas LP no está sujeta a regulación de precios. No obstante, si la COFECE determina que no existen condiciones de mercado en ese eslabón de la cadena productiva, entonces sí será aplicable una regulación de precios. Cabe señalar que en términos de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica, este último concepto (condiciones de mercado) solo puede entenderse referido a condiciones de competencia efectiva o existencia de poder sustancial en un mercado relevante³¹, no así como una facultad para que dicha comisión determine si la distribución no vinculada a ductos de gas LP constituye o no una actividad que conlleva el expendio al público.

Esta interpretación se refuerza por la referencia que hace el precepto en cuestión a los

³¹ **Artículo 96.** Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de parte afectada la resolución u opinión que corresponda, para lo cual se estará al siguiente procedimiento: (...)



artículos 4º, fracción XI, y 82, segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos. El primer precepto define la actividad de distribución como la actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado, de un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados, para su Expendio al Público o consumo final. El segundo precepto, como se indicó, establece que el expendio al público de gas LP estará excepcionado de la regulación de precios que emita la CRE.

Entonces, las disposiciones en cuestión conducen a sostener que las actividades de **comercialización y expendio** al público de gas LP quedan **exceptuadas** de la regulación de precios y contraprestaciones de la CRE. Y en el caso de la **distribución** de ese petrolífero no vinculada a ductos, solo quedará exceptuada si no existe determinación de la COFECE en el sentido de que no existen condiciones de mercado.

Esta interpretación es acorde con la realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión *********, en sesión de catorce de junio de dos mil veintitrés, en donde estableció lo siguiente:

*“46. Así, en primer lugar, el artículo 82, párrafo primero, de la Ley de Hidrocarburos reitera que **la CRE es la autoridad competente** para expedir disposiciones de aplicación general que regulen dichas actividades, lo que incluye los términos y*



condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de servicios, así como las contraprestaciones, precios y tarifas, entre otros. Por su parte, su párrafo segundo precisa la metodología que debe seguirse para determinar las contraprestaciones, precios y tarifas: *tratándose de las distintas a las que corresponden las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolina y diésel, la intervención de COFECE resulta fundamental para determinar si existen o no condiciones de competencia en ese mercado. Si no lo existen, entonces se activan las atribuciones regulatorias de la CRE para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas. En caso contrario, esto es, si COFECE determina que existen condiciones de competencia efectiva, entonces las contraprestaciones, precios y tarifas dejan de considerarse reguladas y se determinan por las condiciones de mercado.*

Ahora bien, en el considerando Trigésimo Octavo del acuerdo reclamado, la CRE especificó qué permisionarios quedarían sujetos a la regulación de precios máximos de gas LP objeto de venta al usuario final:

“TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, para efectos del presente Acuerdo, los permisionarios sujetos a esta regulación de precios máximos de Gas LP objeto de venta al Usuario Final, son los que realizan **alguna o algunas** de las siguientes actividades: i) comercialización de Gas LP, conforme al artículo 19 del Reglamento; ii) **distribución de Gas LP** por medios distintos a ductos, en sus modalidades: a) distribución mediante planta de distribución; b) distribución por medio de auto-tanque y c) distribución mediante vehículos de reparto, en términos de los artículos 4, fracción XI, de la LH y 35 del Reglamento y al Acuerdo A/056/2018 y iii) **expendio al público de Gas LP** en términos



del artículo 4, fracción XIII, 41 y 42 del Reglamento, en sus modalidades, a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal, a excepción de la modalidad estación de servicio para autoconsumo.”

Esto se replica en el capítulo 1, apartado 1.2 De los sujetos obligados de las disposiciones administrativas contenidas en el Anexo Único del acuerdo en cuestión:

“1.2 De los sujetos obligados

*Con el objetivo de proteger los intereses del Usuario Final; los **sujetos obligados** de las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General son aquellos que cuentan con permiso vigente otorgado por la Comisión Reguladora de Energía y que realizan, acorde al contenido de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos y la demás regulación aplicable y vigente, **las siguientes actividades:***

i. Comercialización.

ii. Distribución de gas licuado de petróleo por medios distintos a ductos, en sus modalidades de:

a) distribución mediante planta;

b) distribución por medio de autotank y;

c) distribución mediante vehículos de reparto.

iii. Expendio al público de gas licuado de petróleo, en sus modalidades de:

a) bodegas de expendio;

b) estaciones de servicio con fin específico y;



c) estaciones de servicio multimodal, a excepción de la modalidad de estación de servicio para autoconsumo.

El expendio en la modalidad de estación de servicio para autoconsumo, queda exceptuado del cumplimiento a las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General, toda vez que, comprende la actividad de adquirir y almacenar gas licuado de petróleo en dicha instalación, que se utilice exclusivamente para el suministro de este combustible a los vehículos automotores con equipos de carburación, empleados para la realización de las actividades inherentes al objeto social del permisionario, sin la posibilidad de enajenar el gas licuado de petróleo a terceros o a trasvasar a cualquier otro vehículo de carburación, cuya propiedad o posesión legal no esté bajo su cargo, en términos de lo previsto en los numerales 2.5.1 y 2.5.2 del Acuerdo A/056/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2019.”

En ese sentido, se advierte que en el caso a estudio, el uno de diciembre de dos mil veintiuno la COFECE publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto del dictamen preliminar del expediente *********, en el que al definir la expresión distribuidor, hizo referencia al titular o titulares de un permiso de distribución por medios distintos a ductos, tal como distribución por medio de autotanques, planta de distribución, recipientes



portátiles o recipientes sujetos a presión vía vehículos de reparto, entre otros.

Asimismo, estableció el mercado relevante por referencia a la actividad de distribución de gas LP a los usuarios finales mediante i) plantas de distribución y ii) autotanques.

Concluyó que si bien se identificaron 220 (doscientos veinte) mercados relevantes correspondientes a dicha actividad, en 213 (doscientos trece) de ellos **no existen condiciones de competencia efectiva**:

“Una vez determinados los MERCADOS RELEVANTES, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluyó que hay elementos para determinar preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) MERCADOS RELEVANTES debido a que: i) los MERCADOS RELEVANTES se encuentran altamente concentrados;(27) ii) los DISTRIBUIDORES incrementaron en promedio 145% (ciento cuarenta y cinco por ciento) su margen de ganancia bruto a nivel nacional; iii) existen importantes barreras a la entrada de tipo económicas, normativas y barreras a la salida; iv) existen agentes conocidos como "Comisionistas" y "agrupaciones" cuyas conductas constituyen barreras a la entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de los DISTRIBUIDORES a ciertas zonas geográficas, particularmente a la Zona Metropolitana del Valle de México; v) se ha registrado una escasa o nula entrada de nuevos DISTRIBUIDORES, a pesar de observar incrementos en los márgenes de ganancia; vi) en general, en los MERCADOS RELEVANTES existen pocos competidores y la franja de competidores marginales es reducida en la mayoría de los casos; vii) en el



LETICIA DURAN GONGORA
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.6e
20/07/24 14:16:28

expediente DE-022-2017 y acumulado, algunos AGENTES ECONÓMICOS han sido emplazados por esta COMISIÓN por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la "(...) distribución (...) de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país";(28) y viii) en el caso particular del MERCADO RELEVANTE 32 (Ciudad de México y zona conurbada), se tomaron en consideración elementos adicionales y complementarios al IHH y las participaciones de mercado, a fin de contemplar adecuadamente las características del mercado y determinar las Condiciones de Competencia, entre otros, la capacidad de los DISTRIBUIDORES para sostener un incremento de 285% (dos ciento ochenta y cinco por ciento) en el margen de ganancia bruto y la presencia de "Comisionistas" que dificultan la entrada de nuevos participantes o la concurrencia de Agentes Económicos en ciertas zonas de la Ciudad de México."

Por ende, determinó lo siguiente:

"Finalmente, en la sección 7 del DICTAMEN PRELIMINAR, por lo anteriormente expuesto y señalado, la AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye y determina lo siguiente:

PRIMERO. La AUTORIDAD INVESTIGADORA concluye que hay elementos para determinar preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) MERCADOS RELEVANTES consistentes en la DISTRIBUCIÓN de GLP a USUARIOS FINALES mediante Plantas de Distribución y Autotanque con una dimensión geográfica regional, identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,



67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

SEGUNDO. *Notifíquese mediante oficio a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía el presente DICTAMEN PRELIMINAR que concluye preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en los MERCADOS RELEVANTES señalados en el resolutivo PRIMERO del presente DICTAMEN PRELIMINAR. Lo anterior, conforme al artículo 163, fracción IV, de las DISPOSICIONES.”³²*

En ese sentido, previamente a la emisión del acuerdo reclamado, ya existía una determinación por parte de la COFECE en el sentido de que en un número considerable de mercados relevantes de la actividad de distribución de gas LP por medios no vinculados a ductos, **no existen condiciones de competencia efectiva**. Por lo que con apoyo en lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y, particularmente, en el artículo 77, segundo párrafo, del multicitado reglamento, la CRE estaba facultada para sujetar esa actividad a la regulación de

³²

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636961&fecha=01/12/2021#gsc.tab=0



contraprestaciones y precios, como así ocurrió a través del Acuerdo reclamado.

Asimismo, como se expuso, si bien la CRE en principio no está facultada para sujetar esa actividad a la regulación de precios que emita, existe una salvedad que sí la habilita al respecto, que es cuando la COFECE determina que no existen condiciones de competencia efectiva, como aconteció en el caso concreto. Por lo que, **no podría considerarse que la CRE carecía de competencia para emitir el acuerdo reclamado, específicamente por cuanto hace a la distribución de gas LP no vinculada a ductos ya que, como se indicó, una vez que existe esa determinación, se activan las atribuciones regulatorias de la CRE para establecer precios.**

De igual modo, debe hacerse énfasis en que si bien el extracto publicado por la COFECE claramente señala que se trata de un dictamen preliminar, ello no le quita el carácter de una determinación, que es lo que exigen, en su literalidad, la Ley de Hidrocarburos (artículo 82, último párrafo) y el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley; en cualquier caso, tal determinación fue confirmada al emitir la COFECE su resolución en el expediente *********, con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, reiterando la ausencia de condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) mercados relevantes,



consistentes en la distribución de GLP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanke con una dimensión geográfica regional³³.

Por lo que, contrario a lo argüido por la parte quejosa, la CRE estaba facultada para sujetar la actividad de ese sector (por cuanto hace a la **distribución de gas LP** no vinculada a ductos) a la regulación de contraprestaciones y precios, al haberse determinado previamente por la COFECE que no existen condiciones de competencia efectiva; lo anterior, conforme al supuesto ordinario que deriva de la observancia del marco legal aplicable.

Por otra parte, los argumentos que expone la quejosa *****
** ***** , y conforme a lo cuales pretende exponer que el Acuerdo reclamado es contrario a lo dispuesto en los artículos 16 y 28, tercer párrafo, de la Constitución Federal, porque la CRE carece de competencia para establecer regulación sobre precios máximos de venta al usuario final de gas LP en las actividades de comercialización y expendio al público de gas LP, cuyos precios se deben determinar conforme a las condiciones de mercado.

Debe decirse, que dicho planteamiento es **inoperante**, porque con independencia del análisis de fondo de esos argumentos, lo cierto es que la

³³
<https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Declaratorias/V143/0/5826385.pdf>

CRE³⁴, constituyendo un hecho notorio, en términos el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, debe decirse que el mismo es **fundado, únicamente respecto de la quejosa mencionada.**

La Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley no facultan a la CRE para sujetar a su regulación de precios la actividad de *comercialización y expendio al público* de gas LP. Sobre esto, tanto el artículo 82 de la ley como el diverso 77 del reglamento mencionados son claros en señalar que esas actividades están exceptuadas, y la razón obedece a que los precios en ese eslabón se determinarán conforme a las condiciones de mercado, esto es, *son el resultado de la dinámica de la demanda y de la oferta y de las condiciones de los mercados internacionales*³⁵.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 82, fracciones I y II no resulta aplicable a esas actividades y, en todo caso, lo que prevén estas fracciones debe entenderse referido a las actividades que no están exceptuadas, y ello salvo que a juicio de la COFECE existan condiciones de competencia efectiva, pues en ese supuesto los precios correspondientes también se determinarán por condiciones de mercado.

³⁴https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/843696/Expendio_al_P_blico_de_Gas_Licuado_de_Petrleo_mediante_Estacion_de_Servicio_con_fin_Especifico.pdf

³⁵ [Prospectiva de Gas LP 2017.pdf \(www.gob.mx\)](#)



Ahora, en los considerandos vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo quinto del acuerdo reclamado la CRE estableció lo siguiente:

“VIGÉSIMO CUARTO. Que, el artículo 82 de la LH, establece que la Comisión, expedirá disposiciones de aplicación general para la **regulación de las actividades** en el ámbito de su competencia, incluyendo los precios de los combustibles, mismos que se determinarán conforme a las condiciones de mercado, a menos que a juicio de la COFECE, no existan condiciones de competencia efectiva, lo que de facto ya aconteció con la publicación del EXTRACTO del dictamen preliminar del expediente DC-001-2021, emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. La regulación que para tal efecto se emita, se fijará considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, el artículo 77 del Reglamento, establece que la Comisión expedirá mediante disposiciones administrativas de carácter general, la **regulación de los precios para las actividades permitidas**, la cual tomará en cuenta los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de los mercados competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y operación, y que protejan los intereses del Usuario Final. La Comisión no reconocerá los precios que se aparten a dichos principios y, además los precios que autorice deberán constituir mecanismos que promuevan una demanda y uso racional de bienes y servicios.

(...)



VIGÉSIMO OCTAVO. Que, derivado de las conclusiones que ha realizado la COFECE en su Dictamen Preliminar referido en el Considerando Vigésimo Segundo y que por las características del mercado de gas LP, la concentración de éste difícilmente presentarán modificaciones sustanciales en el corto plazo, además del monitoreo del mercado de Gas LP que realiza la Comisión se observa que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en las actividades de comercialización, distribución y expendio al público de Gas LP y, por lo tanto, no existe un mercado competitivo en México. Cabe señalar que, bajo la estructura de mercado como la que posee México, en la que, los agentes económicos establecen precios con altos márgenes de ganancia que deriva en afectaciones al Usuario Final y restringe el pleno desarrollo del sector energético, en ejercicio de las atribuciones con las que cuenta la Comisión y en beneficio del Usuario Final, la Comisión considera necesario establecer la regulación de precios máximos de Gas LP, con el fin de permitir el desarrollo eficiente de la industria de Gas LP con base en la Declaratoria de condiciones de competencia emitida por la COFECE y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 82 de la LH y el artículo 77 del Reglamento.

VIGÉSIMO NOVENO. Que, la Comisión derivado del análisis de mercado que ha realizado previo a la publicación del Acuerdo A/024/2021 y su prórroga contenida en el Acuerdo A/001/2022, conforme a los resultados arrojados en el Dictamen Preliminar de COFECE referido en el Considerando Vigésimo Segundo y, de conformidad con lo previsto en los artículos 82 de la LH y 77 del Reglamento, se encuentra facultada para emitir la presente regulación de precios máximos de Gas LP, toda vez que no existen condiciones de competencia en la venta de Gas LP al Usuario Final, por lo tanto,



la Comisión llevará a cabo una regulación de precios máximos de Gas LP, en tanto no existan condiciones de competencia que permitan la libre determinación de precios bajo condiciones de mercado.

(...)

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, como se expuso en el Considerando **VIGÉSIMO SEGUNDO**, acorde al contenido del **EXTRACTO** del dictamen preliminar del expediente DC-001-2021, emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la COFECE concluyó que existen elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 (doscientos trece) de 220 (doscientos veinte) mercados relevantes en la Distribución de Gas LP no vinculada a ductos. Sobre este punto, se señala que en el presente instrumento, se abarcarán los 220 (doscientos veinte) mercados relevantes, con la finalidad de evitar distorsiones en el margen de los precios a nivel nacional y proteger las condiciones de acceso al combustible, asegurando el control en los precios de Gas LP en beneficio y protección de los Usuarios Finales.”

Como es posible advertir de ello, la CRE tomó en consideración lo expuesto por la COFECE en el dictamen preliminar mencionado para concluir que *no existen condiciones de competencia efectiva en las actividades de comercialización, distribución y expendio al público de Gas LP y, por lo tanto, no existe un mercado competitivo en México.*

Sin embargo, dicho dictamen únicamente se refiere a los mercados relevantes que ahí se establecen, los cuales **solo abarcan la actividad de distribución de gas LP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanque,**



comercio
petrolífero
FECE c
stitutos v
medios no
inales pu

a CRE
como un
n consi
el reglam
e activid
ble la r
aciones
uso, aun
as LP no
n esa e
mplió con
CE haya
sten con

*

taba con
ción de
ción y
se en un
aplicable



mencionado, por estar acotado a una actividad distinta, como es la distribución no vinculada a ductos de gas LP.

No pasa inadvertido que el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos establece que la CRE tiene entre sus atribuciones la de regular y supervisar el expendio al público y la comercialización de petrolíferos, entre otras actividades; sin embargo, esa disposición no puede interpretarse de manera aislada, sino en relación con lo dispuesto en el artículo 82 del mismo ordenamiento, el cual, como se indicó, exceptúa de la regulación de precios al expendio al público de gas LP. Esto último es reiterado por el artículo 77 del Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de dicha ley y, además, se incluye la comercialización del petrolífero.

Es importante señalar que esto no es desconocido por la CRE, pues en su informe justificado, al interpretar esos artículos, reconoce que esas actividades están exceptuadas de la regulación de precios.

No obstante, la comisión señala como sustento lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, que establece lo siguiente:

“Artículo 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán



sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.

*La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, **con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo**, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:*

*I. La regulación **para cada actividad** en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva **en dicha actividad**, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; (...)"*

A consideración de la CRE, de dicha fracción se desprende que si bien los precios de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado, *refiere como excepción el que a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, no existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad* (foja 219 vuelta).

No obstante, pasa por alto que cuando esa fracción alude a la regulación *para cada actividad*, no es posible incluir el expendio al público y la comercialización de gas LP, pues la ley y el reglamento las excluyen de ello al señalar que los precios en esas actividades se determinarán conforme a las condiciones del mercado (artículo 82, párrafo segundo).



Incluso, aun si se considerara que es aplicable a todas las actividades en las que la CRE tiene atribuciones de regulación, sujeta la aplicación, en primer lugar, al juicio de la *COFECE* y, en segundo lugar, lo circunscribe a la actividad en la que este órgano se pronuncie. Y en el caso, el dictamen preliminar del procedimiento ***** que sirvió de sustento a la CRE únicamente implicó un pronunciamiento y determinación en los mercados relevantes de la actividad de *distribución de gas LP no vinculada a ductos*, no así al *expendio al público y comercialización* del mismo petrolífero.

Por ende, no existía sustento normativo para que la autoridad responsable incluyera también como sujetos obligados por el acto reclamado a los permisionarios que cuentan con un permiso para llevar a cabo las actividades de comercialización y **expendio** al público de gas LP. De ahí lo **fundado** del planteamiento bajo análisis respecto de *****

No pasa inadvertido que conforme al artículo 4º, fracción XI, de la Ley de Hidrocarburos, ante citado, se establece que la actividad de distribución *conlleva* la repartición y traslado de gas LP para su expendio al público o consumo final; sin embargo, ello no puede servir de sustento para hacer extensiva la metodología de fijación de precios máximos de la actividad de distribución a la actividad de expendio y comercialización de ese petrolífero, ya que el artículo 82, párrafo segundo, y



el 77 del reglamento antes citado, establecen que estas últimas están exceptuadas de la regulación de precios, los cuales en ese caso se determinan, en términos del marco legal vigente, conforme a las condiciones de mercado.

Ante lo fundado de tal concepto de violación, lo procedente es **conceder** el amparo solicitado únicamente por cuanto hace a la quejosa *****

***** ** *****

SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo.

El artículo 77, fracción I, se prevé que tratándose de actos positivos, el efecto del amparo será restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Por su parte, en términos del artículo 78 de la ley de la materia, cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional, en este último supuesto, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada, lo que se traduce en la inaplicación únicamente respecto del quejoso o quejosos.

En el caso, la protección constitucional que se concede es para el **efecto** de que **no se aplique** el



acuerdo **A/023/2022** por el que la CRE emite las disposiciones administrativas de carácter general que establecen la metodología para la determinación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, **únicamente** respecto de la actividad de *comercialización* y la actividad de *expendio al público de gas licuado de petróleo*, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal³⁶.

No pasa inadvertido que conforme al principio de relatividad, los efectos de las sentencias deben irradiar únicamente sobre las partes que promovieron el juicio. No obstante, de declarar la inconstitucionalidad del acuerdo reclamado, en esa porción normativa y únicamente respecto de

se generaría una asimetría en el mercado de hidrocarburos, pues habría permisionarios sujetos a precios máximos por las actividades de comercialización y expendio al público de gas LP y otros que estarían en posibilidad de fijar los precios por el mismo producto de conformidad con las condiciones de mercado, tal como lo establece el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de Hidrocarburos, así como el artículo 77 del Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de esa ley, lo cual sería contrario a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional,

³⁶ A excepción de la modalidad de estación de servicio para autoconsumo.



específicamente en relación con los principios de libre competencia y concurrencia.

De ahí que se establezcan los efectos de la protección constitucional en esos términos.

Cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión *****, en sesión de catorce de junio de este año, determinó que lo anterior es adecuado cuando lo que se busca es evitar una asimetría en un mercado de determinado, como ocurre en el presente caso.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se **sobresee** en el juicio de amparo promovido por ***** y ***** y ***** respecto del acto de autoridad que se relaciona en el resultando primero, en relación con lo expuesto en el tercer considerando de esta sentencia.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a ***** y ***** contra las autoridades y por los actos que han quedado relacionados en el resultando primero, atento a los



razonamientos expuestos en el considerando sexto de este mismo fallo.

TERCERO. La Justicia de la Unión **ampara y protege a** ***** ** *****

*****, contra las autoridades y por los actos que han quedado relacionados en el resultando primero, conforme las consideraciones expuestas en la parte final del considerando sexto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

Notifíquese; personalmente de manera electrónica a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y **por oficio** a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo.

Así lo resolvió y firma **electrónicamente Laura Gutiérrez de Velasco Romo**, Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, hoy **treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés**, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de la Secretaria **Leticia Durán Góngora**, quien autoriza y da fe; asimismo, hace constar que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. **Doy fe.**

Jueza

Secretaria

LETICIA DURÁN GÓNGORA
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.fe
20/07/24 14:16:28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



Se hace constar que se giraron los números de oficios 8269 y 8270. Conste.

Fgrr

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del _____, el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicó en la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, la determinación que antecede, con la cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, con excepción de las que deban notificarse personalmente, electrónicamente o por oficio; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
61149837_4138000030801208010.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	LETICIA DURAN GONGORA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.fe	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/08/23 17:49:11 - 31/08/23 11:49:11	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	5d 74 09 ea f4 b0 d2 42 e0 9a 8c 4c 76 ff 7d e0 0c 53 08 89 50 fa 5d f8 be ac 8a 86 c1 e9 df 8e c2 b8 75 ab c4 11 93 9e 6c 68 3f ce 98 30 41 97 c4 c6 88 0a 77 8e 6e 01 28 33 c1 96 27 82 5c db 8e dc ef 8a f4 c2 b8 c0 70 e3 2f 72 66 aa 04 fa f0 d7 6c 06 94 fb 9e cd 03 4f 57 b0 f0 64 72 81 6f a2 66 8a 9b 4d 31 62 04 94 52 0b 0a 02 30 5c 1c 8f 7e 7c cb 6b 31 f0 ad 61 8b 8e e1 13 86 33 db 1b cb 2a 9b 2c 90 9d 2c 35 82 ad b9 cf cb ae 80 d3 ca 76 7c dd ea 58 79 40 a5 40 dc 72 fa 49 c4 57 f9 59 a5 ad bb a5 7d ae e8 8a 34 ba 13 30 ac ab 69 95 13 cf 57 4f e9 f7 1e f6 86 f0 3e 1e e4 25 6b 89 2b 5e b8 c4 c8 1f e4 9d e9 84 9d 22 38 d7 f4 f3 d1 a8 3a 65 e6 a0 36 70 61 ea 18 66 c5 cc 23 a8 16 a2 af a7 b7 df d0 46 10 87 56 ab 1c cd 6b d9 06 12 d2 e1 5d c6 95 78 59 f2 b3 4a			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/08/23 17:49:54 - 31/08/23 11:49:54			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	31/08/23 17:49:12 - 31/08/23 11:49:12			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	37357887			
Datos estampillados:	ql7yphfCLTHfJ3Ud/QibT1ZOSNU=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	LAURA GUTIERREZ DE VELASCO ROMO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.52.37	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/08/23 19:31:01 - 31/08/23 13:31:01	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	9b ff fa 79 6b 76 ed 2f 5a c5 cc e1 83 96 91 a9 93 0f 7b 69 e1 7b fa a1 98 f3 aa e0 57 0a 48 56 0d 33 c0 14 4e ca f2 29 86 52 04 58 e2 02 89 cc eb d7 4b d7 98 f9 7c d3 ba d6 6b aa 18 6a 07 ae cd a7 2e 33 df 4f b9 87 79 d3 c7 1d 03 1d 42 78 0e fc fc 52 03 e0 ee 15 4b a0 27 42 33 39 28 2b 5d 50 8c 34 a8 4e d6 f9 61 24 70 14 04 73 6a 5c 1c e9 17 03 a6 e4 bf 9a 69 4b ef 5f 40 58 7c 5c 75 db 22 e9 cb 64 8c 71 08 f1 ec c2 b7 78 75 81 f5 8f d8 52 b5 61 30 d8 41 9a 79 f0 88 2f 9b 35 fa 15 0f 2d 93 2d 6e 2a 0a 14 fd 94 0b de 42 4b 5c a2 4c a3 14 99 6e 08 dc 17 f5 97 1a 3c bb ab e9 3c 79 80 1b 73 f0 46 fb eb 18 7a d4 d1 3e 53 fd ed eb 59 89 eb 7d c1 e2 c3 2f 11 1b 36 d8 9c fa 3e 57 96 9d 3f af 34 38 fe f5 e4 cf be 4e 7b be 9c cd 69 9b 9c 4b 7d 32 2d c9 9e e8 d2 0d			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/08/23 19:31:01 - 31/08/23 13:31:01			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	31/08/23 19:31:02 - 31/08/23 13:31:02			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	37449441			
Datos estampillados:	8gSE9L5aE/PvzpHLBzhMCFk9iL4=			

El licenciado(a) Leticia Durán Gáñgora, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.